

Obras inconclusas: un lastre para la confianza pública

La falta de gestión y fiscalización no solo inmoviliza recursos, también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La Región de Coquimbo arrastra un problema que se ha vuelto crónico: la acumulación de obras públicas inconclusas. Según cifras oficiales, más de 40 mil millones de pesos permanecen inmovilizados en proyectos que no terminan de ver la luz. Son recursos de todos los chilenos que debieron traducirse en infraestructura, desarrollo y empleos, pero que hoy yacen atrapados en trámites administrativos, quiebras de empresas y una cadena de ineficiencias que parecen no tener responsable.

Los ejemplos abundan y resultan ilustrativos. El Mercado del Mar en Coquimbo, largamente señalado como un “elefante blanco”, recién ha comenzado a reactivarse tras años de paralización. En La Serena, el Complejo Deportivo Vegas Sur sigue siendo un terreno a medio camino entre promesa y frustración. Y como estos, una decena de casos que han desgastado la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para concretar lo que anuncia.

El gobernador regional, Cristóbal Juliá, ha sido categórico al afirmar que la prioridad es concluir las obras, sin buscar responsables del pasado. Una postura comprensible, pero que no debe in-

visibilizar la necesidad de aprender de los errores. Si no se revisa qué falló —desde licitaciones mal diseñadas hasta falta de fiscalización— se corre el riesgo de repetir la historia.

La dimensión de este problema va más allá de lo económico. Cada obra detenida es también una comunidad que pierde oportunidades de desarrollo, una inversión privada que se frena y un empleo que no se crea. En momentos donde se habla de reactivación y crecimiento, la inacción se convierte en un lujo que la región no puede darse.

La ciudadanía espera respuestas y compromisos reales. No bastan los diagnósticos ni las buenas intenciones: se requieren plazos, presupuestos asegurados y responsabilidades claras. Porque la infraestructura pública no es un favor de las autoridades, sino un derecho de las comunidades que confían en que sus impuestos se transformen en bienestar.

Dejar proyectos a medio hacer erosiona la credibilidad institucional y siembra un clima de desconfianza que cuesta años revertir. La región merece un compromiso firme: toda obra iniciada debe ser obra terminada.